



Columna

Economista, consultor, fundador de Corporación Cultural

Jorge Álvarez



La Región que produce, paga y calla

El pasado 26 de abril de 2026, El Mercurio de Santiago publicó el titular “Inyección de recursos de royalty: las 10 comunas que recibirán los montos más altos”. Para Antofagasta, la noticia fue tan elocuente como decepcionante, nuestra ciudad no aparece en esta lista. No es un error ni una omisión técnica, es una clara señal política. Una más de tantas, el centralismo nos desconoce.

El titular, indica que de las aproximadas 347 comunas del país, 309 recibieron recursos del royalty minero. El análisis revela que solo el 24% de los fondos se destinó a 45 comunas mediante “Fondos Comunes Mineros”, mientras que el 76% restante se distribuyó entre 302 comunas a través del “Fondo de Equidad Territorial”. En los hechos, el royalty fue transformado en un instrumento para reducir brechas presupuestarias a nivel de todas las comunas, desviándose de su propósito original, convirtiéndose en lo que nunca debió ser: una caja redistributiva encubierta.

“Somos una región enferma, pero no resignada. Ningún territorio enfermo mejora sin diagnóstico y tratamiento”.

Así, las ciudades que soportan contaminación paisajista, enfermedades y accidentes laborales, climas adversos, aire contaminado por metales particulados y articulados, incontrolada inmigración, altos costos de vida, sistemas de turnos que no se acompañan con apoyo psicológico, ausencia de atractivos paisajistas para el disfrute; siguen recibiendo lo que el gobierno central determina. Peor aún, cinco comunas de Santiago —Puente Alto, Maipú, La Pintana, El Bosque y Cerro Navia—

figuran entre las más beneficiadas, pese a no sufrir externalidades negativas asociadas a la minería -felizmente-. Esto resulta francamente incomprensible.

La paradoja es brutal: a menor impacto, mayor transferencia de recursos. Esta relación inversa resulta injusta e incomprensible en un país que se precia de administrar responsablemente su riqueza minera. Esto solo pasa en Chile. Véanse los ejemplos de ciudades mineras en el mundo que son un lujo de desarrollo.

No es una oposición a la reducción de brechas. Eso es necesario y justo. Lo inaceptable es la trampa: 1) Usar el royalty para fines que el Estado puede —y debe— financiar con otros instrumentos. 2) Vender el royalty como compensación territorial a las externalidades, cuando tres cuartas partes del dinero nunca llega a los territorios afectados.

La gran minería tampoco puede eludir esta discusión. Si exige altos estándares éticos, de gobernanza y sostenibilidad a nivel internacional, no debe guardar silencio cuando el Estado distorsiona el destino de los recursos que ella genera. Debe también exigir que estos recursos se administren con probidad, sobre todo no usar en corrupción. Recientes informes de Contraloría son claros: muchos municipios han sido malos custodios, priorizando celebraciones por sobre la ayuda social.

Antofagasta no puede seguir aceptando este abandono. Somos una región enferma, pero no resignada. Ningún territorio enfermo mejora sin diagnóstico y tratamiento. Y el primer síntoma que debemos abandonar es el silencio. Despertar es hoy una urgencia moral, justa y democrática. Sugerimos a las autoridades reforzar su compromiso con Antofagasta, impulsando una mejor gestión de sus recursos y promoviendo un desarrollo equilibrado y acorde a las necesidades de la región.